

EL RECUADRO

Ya en 2018, la economía española comenzó a mostrar signos de agotamiento en los factores que la impulsaban, iniciando un proceso de ralentización que se ha agravado en los últimos meses, en sus magnitudes de valor añadido y de empleo.

La demanda interna y, en particular, el consumo privado, tienden a desacelerarse dada la maduración del ciclo económico y la incertidumbre y el empeoramiento de las expectativas.

La demanda externa disminuye su aportación positiva por la ralentización del comercio mundial, el parón en alguna de las principales economías europeas, las tensiones del Brexit y el encarecimiento de las importaciones energéticas.

Todos esos factores están detrás del goteo de revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento para 2019 y 2020, marco en el que la situación política lejos de suponer un factor de seguridad y previsibilidad, constituye un riesgo más y no el menor.

El Gobierno que salga de las próximas elecciones, si por fin eso llega a ocurrir, debería fijarse con objetivo fundamental no obstaculizar la generación de riqueza y empleo. Es decir, no añadir un sobrecoste a la economía española ni añadir incertidumbres a los inversores y los mercados internacionales.

La política económica debe tener como objetivo ganar competitividad exterior e interior. En caso contrario, está abocada al fracaso, producirá paro, reducirá los niveles de riqueza y comprometerá la viabilidad del estado del bienestar.

Y ganar competitividad, no tiene otro camino que el de seguir el proceso de reformas estructurales para limitar a medio y largo plazo el gasto público, que es el gran dogal que atenaza nuestro desarrollo económico y las ineficiencias de nuestros mercados de bienes y servicios.

El nuevo gobierno debería mantener las grandes líneas de la política económica y la senda de las reformas que permitieron cambiar la tendencia de nuestra economía para salir de la crisis y crear empleo en los últimos años.

La economía española necesita que no vuelvan a surgir dudas sobre su solvencia y que se mantenga la confianza de los mercados, de modo que España siga siendo atractiva para la inversión productiva y pueda seguir creando empleo.

Junto a ello, se ha de invertir en infraestructuras productivas, estimular la demanda de bienes industriales, mejorar la financiación de las empresas y actuar contra la morosidad.

Apoyar la internacionalización de las empresas y trabajar por la simplificación administrativa y la unidad de mercado son otros de los terrenos en los que el próximo gobierno encontrará espacio para tomar medidas que realmente contribuyan a mejorar la vida de los españoles.

Combatir el fraude fiscal, coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, y reducir los Impuestos sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones deben ser líneas de actuación claves en la política fiscal.

En el terreno laboral, las reformas deben centrarse en flexibilizar y simplificar los sistemas de contratación, reducir las cotizaciones sociales empresariales, modernizar el sistema de negociación colectiva y reforzar el papel de los agentes sociales.

Desde el punto de vista industrial, se ha de conseguir un suministro de energía competitivo y seguro, mejorar las interconexiones internacionales eléctrica y gasista, y definir un mix de generación equilibrado. Además de apoyar el sistema de I+D+i y orientarlo más al mercado y mejorar los sistemas de financiación y el marco normativo, apoyando decididamente a la Pyme Industrial.

Por último, la economía española necesita que se favorezca y se impulse la transformación digital de las empresas, en tecnologías, procesos y productos, en el acceso a los mercados, en las relaciones con proveedores y clientes y en la gestión del personal y del conocimiento.